



Asamblea General

Distr. general
14 de diciembre de 2016
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

34º período de sesiones

27 de febrero a 24 de marzo de 2017

Temas 2 y 10 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del
Alto Comisionado y del Secretario General**

Asistencia técnica y fomento de la capacidad

Resumen del taller sobre la implantación de mecanismos y metodologías eficaces e inclusivos para incorporar los derechos humanos en la formulación y aplicación de políticas públicas

Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Resumen

Este informe se presenta atendiendo a lo dispuesto en la resolución 30/24 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo decidió organizar un taller de expertos con el fin de analizar mecanismos y metodologías eficaces, inclusivos y participativos para incorporar los derechos humanos en la formulación y aplicación de políticas públicas, e invitar a participar en ese taller a los Estados, los órganos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales, los mecanismos regionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, las instituciones nacionales de derechos humanos y los demás interesados pertinentes.

GE.16-22133 (S) 060117 090117



* 1 6 2 2 1 3 3 *

Se ruega reciclar



I. Introducción

1. En su resolución 30/24, el Consejo de Derechos Humanos afirmó que la participación inclusiva de todos los sectores de la sociedad en el examen y la elaboración de políticas y programas que afectaran a toda la población era crucial para el éxito de esos procesos. También reconoció que la planificación y la formulación de las políticas públicas mediante enfoques participativos y accesibles eran factores esenciales para promover el respeto y la salvaguardia del ejercicio efectivo de los derechos humanos. En su resolución, el Consejo solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que organizara un taller de expertos con el fin de analizar mecanismos y metodologías eficaces, inclusivos y participativos para incorporar los derechos humanos en la formulación y aplicación de políticas públicas, en el que participaran los Estados, los órganos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones académicas, las instituciones nacionales de derechos humanos y los demás interesados. El Consejo también solicitó al ACNUDH que preparara un informe resumido sobre los debates mantenidos durante el taller y que lo presentara al Consejo en su 33^{er} período de sesiones. Este informe se elaboró en respuesta a esa solicitud.

2. El ACNUDH, tras consultar a todos los asociados pertinentes, definió la metodología del taller, velando por que en él se abordaran las formas prácticas de incorporar los derechos humanos en todas las fases de la proyección, la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. La participación en el taller estuvo abierta a todos los Estados Miembros. Los panelistas y los encargados del debate fueron seleccionados en función de su competencia y su experiencia práctica en la elaboración de políticas nacionales, teniendo debidamente en cuenta los criterios del equilibrio de género y la distribución geográfica. El taller, que se celebró el 5 de septiembre de 2016, tenía por objeto el estudio de nuevas oportunidades y el intercambio de mejores prácticas respecto de la implantación de mecanismos eficaces para una formulación de políticas públicas inclusiva y participativa, con vistas a la integración de una perspectiva de derechos humanos. En los debates también se analizó el papel central de la sociedad civil y los titulares de derechos en esos procesos.

3. Participaron en el taller los siguientes panelistas y encargados del debate: Filippo di Robilant, miembro del Consejo de Administración de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Lin Lim, miembro del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos; Mohamed Boulaa, Profesor de la Universidad de Orán (Argelia); Sara Sekkenes, Asesora sobre Asociaciones de Colaboración de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ginebra; Felix Kirchmeier, Director de Estudios de Política de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra; Laura-Maria Crăciunean-Tatu, Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Lucian Blaga de Sibiu (Rumania); Luis Espinosa Salas, Consejero de la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; José Antonio Burneo Labrín, Profesor de la Universidad Católica del Perú; y Judith Robertson, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia. Moderaron el taller Mahamane Cissé-Gouro, Jefe de la Subdivisión para África de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica del ACNUDH; Craig Mokhiber, Jefe de la Subdivisión de Desarrollo y Cuestiones Económicas del ACNUDH; Gladice Pickering, Agregada para Asuntos Jurídicos de la Misión Permanente de Namibia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; y Shahrzad Tadjbakhsh, Jefa de la Subdivisión del Examen Periódico Universal del ACNUDH.

4. Durante el diálogo hicieron uso de la palabra los representantes de Argelia, Chile, Colombia, el Ecuador, Italia y Portugal. También participó en el debate un representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Hicieron uso de la palabra asimismo los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales (ONG): Autistic Minority International, Alianza Internacional de la Discapacidad y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo.

II. Sesión de apertura

5. La Embajadora y Representante Permanente del Ecuador, María Fernanda Espinosa, presentó a los panelistas y señaló que el objetivo del taller era buscar formas de hacer las políticas públicas más inclusivas y, por consiguiente, más eficaces para posibilitar el disfrute efectivo de los derechos humanos por la población. Para ello era necesario también mejorar la utilidad de la labor del Consejo de Derechos Humanos a nivel de los países, de modo que tuviera efectos tangibles para los titulares de derechos. Observó que esta responsabilidad no incumbía únicamente a los Gobiernos, sino a las sociedades en su conjunto. Añadió que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible brindaba valiosas oportunidades a este respecto. La Embajadora Espinosa acogió con satisfacción el taller, destacando su importancia como foro para el diálogo y el intercambio de experiencias y prácticas positivas.

6. En sus observaciones introductorias, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, subrayó que la labor de incorporar los derechos humanos en la formulación de las políticas públicas conllevaba una gran responsabilidad. A fin de lograr ese objetivo era necesario encontrar la ruta o vía más firme para aliviar el sufrimiento humano prevenible. Hizo referencia al primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su afirmación introductoria de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El reto consistía en conseguir que así fuera efectivamente para todos, en todas partes. Los grandes obstáculos a los que se enfrentaban cada día las personas para ejercer sus derechos no eran meros accidentes, ni se debían siempre a la falta de recursos públicos. Algunas de las trabas principales eran fruto de las políticas públicas y sociales discriminatorias que dejaban a algunos a la zaga. Esos obstáculos que frenaban el desarrollo los creábamos nosotros mismos, de modo que también estaba en nuestras manos eliminarlos. Se podía optar por vías alternativas. Algunas de las políticas que regulaban cuestiones como la ordenación de las tierras, las condiciones de trabajo o las relaciones laborales fomentaban activamente la desigualdad. A estas decisiones políticas había que sumar la discriminación racial; por ejemplo, los afrodescendientes se enfrentaban a una desventaja persistente en la búsqueda de empleo y el acceso a los servicios públicos. La proporción de las minorías era excesivamente elevada en las prisiones, pero a menudo insuficiente en las instancias decisorias. La Alta Comisionada Adjunta añadió que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible era clara y explícita a este respecto. Al prometer que “nadie se quedaría atrás” se asumía el compromiso de no permitir que ningún tipo de intolerancia marcara la pauta de las políticas públicas. La gobernanza debía cimentarse en la dignidad y la justicia, de modo que nadie fuera excluido o dejado atrás. La Alta Comisionada Adjunta recordó que los propios Estados Miembros habían establecido leyes internacionales que prohibían la discriminación. La forma más rápida y eficaz de empoderar a las personas era convertirlas en agentes del cambio facultados para participar en los procesos de planificación y adopción de decisiones.

7. La Alta Comisionada Adjunta hizo referencia a un informe reciente del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en el que este había expuesto que los derechos económicos, sociales y culturales, en muchos casos todavía, seguían

siendo invisibles en la legislación y las instituciones de numerosos Estados Miembros (A/HRC/32/31, párr. 2). El reconocimiento de esos derechos en la legislación y en la práctica era esencial para reprimir a las élites consolidadas que se protegían prescindiendo de los derechos económicos y sociales. La buena noticia era que no solo resultaba posible implantar políticas públicas equitativas, sino que, además, estas eran convenientes desde el punto de vista financiero, racionales desde el punto de vista técnico y conducentes a la seguridad. A modo de ejemplo, la Alta Comisionada Adjunta recordó el caso de muchos Estados de América Latina, en los que el gasto social estratégico estaba permitiendo superar gradualmente las desigualdades sociales y económicas. Para que esas políticas resultaran eficaces, era necesario recopilar datos desglosados y analizarlos. Así pues, el taller brindaba una valiosa oportunidad para beneficiarse de las ideas de los participantes.

8. Al presentar el programa del día, el Oficial Encargado de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica del ACNUDH, Gianni Magazzeni, explicó que el taller se había concebido como una serie de cuatro diálogos consecutivos en los que se tratarían determinados aspectos y etapas del proceso de formulación de políticas. El primer diálogo se centraría en la fase preparatoria y el diagnóstico para la elaboración de políticas nacionales. En el segundo se estudiaría la proyección de las políticas, prestando especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables. En el tercer diálogo se abordaría la implantación de mecanismos para la incorporación de los derechos humanos por conducto de las políticas nacionales. El cuarto diálogo se centraría en los mecanismos e instrumentos destinados a la vigilancia de la ejecución de las políticas nacionales y su seguimiento. El taller concluiría con un análisis de los resultados y las reflexiones de los panelistas y los encargados del debate sobre la forma de avanzar.

III. Primer diálogo: fase preparatoria y diagnóstico para la elaboración de políticas nacionales

9. El Jefe de la Subdivisión para África de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica del ACNUDH, Mahamane Cissé-Gouro, abrió el diálogo destacando la importancia de la fase preparatoria inicial para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de la formulación de políticas, ya que los problemas sociales y económicos graves solo podían combatirse partiendo de un análisis sólido basado en datos exactos. En un sentido más amplio, también era necesario comprender a los actores y sus motivaciones e intereses.

10. El miembro del Consejo de Administración de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Filippo di Robilant, subrayó la importancia de promover la concepción de los derechos humanos como una cuestión horizontal y transversal, recordando que la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales generaba inclusión y justicia social. Los derechos humanos no debían considerarse un asunto que atañía únicamente a las minorías o un plus opcional, sino algo de lo que todas las personas debían disfrutar. A fin de actuar de forma proactiva y no reactiva, los derechos humanos debían integrarse en los debates sobre las políticas nacionales y reflejarse en todos los niveles de gobernanza, implicando a la vez a los interesados no gubernamentales desde un enfoque sistémico.

11. El Sr. di Robilant instó a las Naciones Unidas y los órganos regionales y nacionales a que cooperaran a varios niveles para hacer efectivos los derechos. Habida cuenta de la complejidad de los retos a los que se enfrentaba el mundo y la diversidad de los Estados, las entidades tanto estatales como no estatales de derechos humanos tenían que trabajar juntas y emprender iniciativas comunes en los ámbitos de sus respectivas capacidades. El intercambio de mejores prácticas podía ayudar a aunar los conocimientos y las experiencias de diferentes Estados. Debían crearse más oportunidades para el intercambio de buenas

prácticas y el apoyo de igual a igual entre los Estados. Podían utilizarse indicadores comunes para evaluar las estrategias nacionales de derechos humanos, de modo que, por ejemplo, fuese posible verificar si los fondos se estaban empleando para mejorar el nivel de protección de los derechos humanos, no se estaban empleando o, peor aún, estaban yendo a parar a bolsillos particulares. Aunque se necesitaban urgentemente instrumentos simples pero esenciales para la rendición de cuentas, muchos Estados se resistían a adoptarlos.

12. Entre las iniciativas prometedoras emprendidas a este respecto figuraban el Coloquio Anual sobre Derechos Fundamentales de la Comisión Europea y el Foro sobre Derechos Fundamentales, organizado por primera vez en junio de 2016 en Viena por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estas reuniones habían sido oportunidades para promover la cooperación y el intercambio de datos a varios niveles, impulsar el debate y crear políticas de derechos humanos sólidas y específicas que ayudaran a salvaguardar los valores comunes. A fin de lograr un cambio positivo era esencial fomentar sociedades inclusivas impartiendo educación sobre derechos humanos y educación para la ciudadanía desde la escuela primaria hasta los niveles más altos de la enseñanza. Las organizaciones internacionales debían desempeñar una función fundamental en la difusión de los principios de derechos humanos, el fomento del pensamiento crítico y la alfabetización mediática y el aumento del entendimiento intercultural a través de la educación. El Sr. di Robilant observó que el programa europeo Erasmus era un buen ejemplo en el contexto de esta labor.

13. Recordando el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros” y, en particular, su aplicación práctica a la elaboración de instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Sr. di Robilant subrayó la importancia de implicar a los titulares de derechos y consultarlos, especialmente en el caso de los grupos vulnerables. Además, recordando que “no se puede gestionar lo que no se puede medir”, destacó la importancia de promover la elaboración de indicadores a nivel nacional. Para adoptar decisiones políticas acertadas era fundamental disponer de datos estadísticos sólidos y fiables, ya que servían de base para plantear preguntas y encontrar respuestas. El Sr. di Robilant pidió que se formularan propuestas más concretas de carácter técnico y sugirió, por ejemplo, la creación de un sistema internacional de información sobre los derechos humanos, una especie de plataforma en la que reunir datos e indicadores de alta calidad de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otras instituciones pertinentes de la Unión Europea, como Eurostat, el mecanismo de evaluación de Schengen, el Defensor del Pueblo Europeo y otros órganos regionales. Un sistema de ese tipo reforzaría la participación de la sociedad civil, contribuiría a crear conciencia pública sobre las normas y los mecanismos de supervisión internacionales y ayudaría a las instancias decisorias a adoptar decisiones fundamentadas y efectuar las evaluaciones correspondientes.

14. El Sr. di Robilant subrayó además la necesidad de prestar atención al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en cuanto a legislación y políticas de derechos humanos. Explicó que otorgar prioridad a los derechos humanos era también una cuestión práctica, y que, sin embargo, muchos legisladores, jueces, juristas y funcionarios seguían desconociendo las obligaciones dimanantes de los tratados y convenios internacionales y el impulso que estas imprimían a la promoción de los derechos humanos para todos. Esta situación planteaba problemas, especialmente en los casos en que la justicia era administrada por diversas entidades a distintos niveles del gobierno. Se necesitaban instrumentos simples y prácticos, destinados en particular a los profesionales del derecho, para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Las universidades y los órganos de acreditación profesional, por ejemplo, podían impartir formación sobre los derechos humanos como un módulo obligatorio para la obtención de un título profesional.

15. En los ámbitos ejecutivo y legislativo, el Sr. di Robilant propuso que en todos los Estados que fueran partes en convenciones internacionales se implantara un mecanismo *ex ante* de verificación de la conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, a cargo de una subdivisión administrativa creada específicamente a tal efecto, para examinar todos los proyectos de ley o decreto antes de su aprobación por la autoridad competente y su subsiguiente aplicación. Este mecanismo sería similar al de las evaluaciones de impacto ambiental que ya efectuaban muchos Estados antes de aprobar y aplicar políticas y leyes fundamentales.

16. El Sr. di Robilant subrayó la necesidad de crear una “combinación inteligente” aumentando la cooperación sistémica entre entidades clave, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, los órganos de promoción de la igualdad, los tribunales nacionales, las defensorías del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil. Debía darse voz a las ONG en el contexto de las valoraciones y evaluaciones del impacto, y en el examen de la aplicación de la legislación vigente. A esos efectos, era conveniente establecer a nivel nacional un órgano con poder de convocatoria para reunir a los principales agentes de la sociedad civil con el fin de intercambiar experiencias y mejores prácticas y formular propuestas para la mejora y la aplicación de las políticas. A modo de ejemplo, el Sr. di Robilant se refirió a la experiencia de la Agencia de los Derechos Fundamentales y su Plataforma de los Derechos Fundamentales. Debía estudiarse el establecimiento de plataformas similares a nivel nacional en los países en los que aún no existieran instrumentos comparables, lo que contribuiría a la creación de comunidades nacionales de derechos humanos. El Sr. di Robilant recordó que la formulación de políticas sobre los derechos fundamentales mediante la participación de diversos sectores de la sociedad era una cuestión fundamental en el marco de los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

17. Por último, el Sr. di Robilant destacó que los desafíos mundiales que planteaban la migración, la pobreza, la diversidad cultural, el cambio climático o la gobernanza, entre otras cuestiones, no podían abordarse sin la participación directa de las ciudades. La urbanización siempre había sido un vector fundamental del cambio en la configuración del desarrollo social, incluido el aspecto de la igualdad social. Sin embargo, pocas veces se daba voz a las ciudades en los debates sobre cuestiones mundiales. Por tanto, era necesario encontrar una forma de otorgar a las administraciones locales un papel más activo en los procesos de adopción de decisiones.

18. Lin Lim, encargada del debate, miembro del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, convino plenamente con el Sr. di Robilant en que los derechos humanos eran una cuestión transversal respecto de todos los programas de políticas para el desarrollo, la paz, la seguridad y la justicia social. Esa transversalidad había cobrado una importancia sin precedentes a raíz del compromiso asumido por todos los Estados de aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, basada en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. La Sra. Lim señaló que los instrumentos de derechos humanos ofrecían directrices útiles para fortalecer la especificidad y la calidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para efectuar las mediciones necesarias al objeto de evaluar los avances de cara al logro de esos objetivos. Hizo hincapié en que la incorporación de los derechos humanos debía basarse, ante todo, en un diagnóstico participativo e inclusivo de la situación de los derechos humanos y de las dificultades que se afrontaban en cada Estado.

19. La Sra. Lim señaló que, en los diversos Estados visitados por la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, los miembros de la Junta habían constatado que

la aplicación de una perspectiva de derechos humanos a las políticas nacionales resultaba más eficaz cuando se basaba en pruebas y se cimentaba en un análisis exhaustivo de los derechos humanos. Por ejemplo, en Ucrania, tanto los organismos gubernamentales como el equipo de las Naciones Unidas en el país y los asociados para el desarrollo habían puesto de relieve la importancia que concedían a los informes temáticos y de supervisión del ACNUDH como base objetiva y actualizada para formular sus propios programas. En México, el Fondo de Contribuciones Voluntarias había venido prestando apoyo a los asociados nacionales y a la oficina del ACNUDH en el país en la labor de recopilación de información y datos sobre la situación de los derechos humanos. En Viet Nam, a instancias del Gobierno, se había llevado a cabo una revisión del proyecto de plan estatal de desarrollo quinquenal, la cual había permitido detectar varias esferas en las que podía reforzarse la promoción de los derechos laborales y el trabajo decente adoptando un enfoque más basado en los derechos.

20. Los procesos participativos e inclusivos habían contribuido a que las políticas adoptadas respondieran a la demanda y reflejaran las prioridades y compromisos nacionales, lo cual resultaba especialmente importante para disipar las preocupaciones en cuanto a que las políticas basadas en los derechos se estuvieran imponiendo a los Estados desde fuera. Este enfoque también promovía la implicación y el liderazgo nacionales, que eran fundamentales para impulsar una agenda basada en los derechos compleja y delicada. También abría posibilidades de comunicación y cooperación entre las distintas partes interesadas. Varios Estados habían señalado que, respondiendo a la convocatoria del equipo de las Naciones Unidas en el país, y, en particular, siguiendo las orientaciones de un asesor de derechos humanos apoyado por el ACNUDH, diversos agentes nacionales habían podido trabajar de consuno con el objetivo común de promover políticas y programas basados en los derechos. En la República Unida de Tanzania, por ejemplo, el examen periódico universal había servido de foro inclusivo para debatir cuestiones de derechos humanos, y la implicación de múltiples interesados había permitido elaborar un informe nacional que reflejaba verdaderamente las opiniones de todo el país en cuanto a las prioridades en materia de derechos humanos. Las principales recomendaciones se recogieron en un plan nacional de acción sobre derechos humanos que promovía explícitamente la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en los ámbitos del desarrollo y la reducción de la pobreza.

21. Siguiendo un proceso participativo e inclusivo de incorporación de los derechos humanos se defendía el derecho de todos los interesados a participar en las decisiones que afectaban a sus vidas y sus medios de subsistencia. También se concedía a las personas una voz y una plataforma para comunicar sus necesidades, y se les otorgaba capacidad para implicarse de manera efectiva y para reclamar su derecho a beneficiarse justa y equitativamente de los frutos del desarrollo. El logro de una participación representativa de base amplia exigía, en primer lugar, que se estableciese quiénes eran los titulares de derechos y los titulares de deberes. La discriminación era una de las principales causas de la falta de participación, la exclusión y la marginación. Por consiguiente, era esencial definir todas las formas de discriminación y prestar especial atención a los grupos más marginados y vulnerables.

22. Debía hacerse más hincapié en la importancia de la alfabetización jurídica de la población. Las personas no podían exigir leyes y políticas basadas en los derechos si desconocían sus derechos humanos y sus obligaciones al respecto. Las leyes no resultaban de gran utilidad si los titulares de derechos no sabían dónde podían consultarlas, de qué modo podían hacerlas valer o cómo podían obtener reparación en casos de vulneración. Haciéndose eco de la propuesta formulada por el Sr. di Robilant de que se impartiera una educación para la ciudadanía basada en los derechos humanos desde la escuela primaria, la Sra. Lim señaló que los programas de cooperación técnica encaminados al logro de objetivos económicos, como la creación de oportunidades de generación de ingresos para

los pobres, especialmente para las mujeres marginadas, tenían repercusiones de mayor alcance y más sostenidas cuando incluían un componente de concienciación sobre los derechos y las obligaciones legales.

23. La Sra. Lim observó que no solo los titulares de derechos podían beneficiarse de la educación y la capacitación en el contexto de la formulación de políticas y la supervisión de su aplicación con un enfoque basado en los derechos. Los titulares de deberes, a saber, los legisladores, los jueces, la policía y los funcionarios de los distintos niveles del gobierno, no solían estar plenamente familiarizados con las obligaciones que les incumbían en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. También ignoraban, por lo general, que los instrumentos de derechos humanos podían proporcionar un marco coherente y eficaz para la planificación y la acción nacionales. Además, era muy importante que los titulares de deberes supieran cómo aplicar un enfoque de derechos humanos no solo a las políticas, sino también a los presupuestos.

24. Tras las ponencias iniciales, se cedió la palabra a los Estados Miembros y otros participantes.

25. El Ecuador consideraba la formulación de políticas públicas un medio para lograr la solidaridad social y un elemento fundamental de un Estado de derecho. Un diagnóstico adecuado aseguraba que las políticas se basaran en datos fiables y estuvieran dirigidas a abordar preocupaciones importantes en relación con los derechos humanos. A la vez, este enfoque también contribuía a garantizar la sostenibilidad de las medidas que se adoptaran. En este contexto era fundamental obtener datos estadísticos y establecer bases de referencia, así como indicadores cuantitativos y cualitativos de los derechos humanos.

26. Italia había creado un comité interministerial para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que incumbían al Estado y velar por que la adopción de decisiones en la esfera pública fuera un proceso participativo e inclusivo. El orador también puso de relieve la importante función que correspondía a los parlamentos en la formulación de las leyes y las políticas. Italia convino en que la formación era un requisito fundamental para promover la efectividad de los derechos humanos, y pidió a los panelistas que ofrecieran más detalles sobre las exigencias y desafíos a este respecto en la era digital.

27. Argelia velaba por aplicar un enfoque inclusivo y participativo a la formulación de políticas en todos los niveles. Las instituciones estatales aplicaban sistemáticamente las normas internacionales y regionales de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos participaba activamente en los procesos nacionales de adopción de decisiones. Se impartía educación sobre los derechos humanos en todos los niveles escolares, y los servicios de seguridad recibían formación especial al respecto. Argelia pidió a los panelistas que expusieran sus opiniones sobre la forma en que los Estados podían optimizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda popular.

28. La ONG Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo subrayó la importancia del principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, e hizo referencia a un manual de reciente publicación sobre los derechos humanos y la extrema pobreza. El manual ya se había utilizado en sesiones de capacitación en el Senegal y Haití.

29. El representante del UNFPA señaló que, como parte del sistema de las Naciones Unidas, el UNFPA estaba aplicando un enfoque basado en los derechos humanos a toda su programación. Era importante reconocer que los derechos humanos no eran un mero conjunto de principios y que su efectividad constituía de por sí un objetivo.

30. En respuesta a las preguntas y observaciones formuladas, el Sr. di Robilant señaló que la cuestión fundamental era determinar la forma de reforzar la rendición de cuentas institucional por el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y

fundamentales que incumbían a los Estados y las entidades regionales. Citó ejemplos del contexto europeo, concretamente en el marco de los Tratados de Ámsterdam y de Niza, que conferían especial importancia a la supervisión periódica y a la función preventiva de la Comisión Europea.

31. La Sra. Lim observó que en el Consejo de Derechos Humanos se solían analizar preocupaciones relativas a los derechos humanos, pero no se prestaba tanta atención a las buenas prácticas de los distintos países que podían ayudar a resolver los problemas detectados. En su opinión, el taller constituía un foro adecuado para el intercambio de dichas prácticas.

IV. Segundo diálogo: formulación de políticas, con especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables

32. El Jefe de la Subdivisión de Desarrollo y Cuestiones Económicas y Sociales del ACNUDH declaró abierto el segundo diálogo, señalando que la atención se centraría en la determinación de los grupos que necesitaban una atención especial, así como en la promoción de sus derechos y que se escuchara su opinión en la formulación de políticas. Señaló que un marco normativo era la base de esa labor e invitó al panel a estudiar la forma en que se podía dar sentido a esas obligaciones jurídicas, a fin de que nadie se quedara atrás.

33. Mohamed Boulaa, Profesor de la Universidad de Orán (Argelia), destacó el papel del Estado en la protección de los grupos vulnerables de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ese papel requería que los Gobiernos ajustaran sus políticas para garantizar los derechos y las libertades y mejorar la situación de esos grupos. Argelia había seguido este camino mediante la ratificación de todos los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las convenciones sobre los derechos del niño, la mujer, los migrantes y las personas con discapacidad. Si bien Argelia había adoptado esas obligaciones con algunas reservas, siempre había presentado alternativas para asegurar su pleno alcance y aplicación. También había cumplido su obligación de informar a los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales y el examen periódico universal, y de aplicar sus recomendaciones. Argelia había integrado sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en la legislación nacional, en el entendimiento de que las obligaciones internacionales prevalecían sobre las leyes nacionales. Las nuevas leyes se elaboraban de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y se modificó la legislación existente para cumplir tales requisitos. Más importante aún, los jueces debían aplicar el derecho internacional de los derechos humanos de manera coherente y uniforme. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario también se enseñaban en las universidades de Argelia. La reforma constitucional de 2016 era la demostración más reciente del compromiso del Estado con los derechos humanos, ya que incluía artículos que aseguraban la igualdad de género en las asambleas electivas y en el mercado de trabajo. La Constitución prohibía el trabajo de los niños menores de 16 años. En Argelia también había garantías jurídicas de los derechos de las personas con discapacidad en su acceso al mercado de trabajo.

34. El Jefe de la Subdivisión de Desarrollo y Cuestiones Económicas y Sociales, Craig Mokhiber, dio las gracias al Sr. Boulaa por haber puesto de relieve el valor de basar las políticas en las convenciones internacionales y utilizar los mecanismos internacionales de asesoramiento y orientación.

35. Sara Sekkenes, encargada del debate, Asesora sobre Asociaciones de Colaboración de la Oficina del PNUD en Ginebra, se mostró de acuerdo con la evaluación del Sr. Boulaa de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos como una valiosa orientación para la formulación de políticas. Señaló que un enfoque basado en los derechos humanos no consistía solo en integrar el contenido de las normas y recomendaciones de derechos humanos en los programas y las políticas; sino que era también un recordatorio de que, a fin de incorporar los derechos humanos de manera efectiva, se requería un enfoque de principios, más concretamente, asegurarse de que los esfuerzos se adhirieran a los principios de no discriminación, participación y rendición de cuentas. El PNUD había integrado un enfoque basado en los derechos humanos en sus programas, como había quedado demostrado por las normas sociales y ambientales aprobadas en 2015.

36. En Sudáfrica, el PNUD estaba dirigiendo el apoyo coordinado de las Naciones Unidas para establecer un marco jurídico y de políticas conforme con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo era aplicar las disposiciones de la Convención con miras a reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Los pueblos indígenas eran otro grupo a menudo desfavorecido y excluido, habida cuenta de que sus medios de vida podían depender en gran medida de sus derechos y su acceso a la tierra. El PNUD había estado trabajando de manera innovadora para fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a fin de entablar diálogos eficaces donde las prioridades y propuestas de medidas pudieran racionalizarse en los procesos nacionales de formulación de políticas. En Nicaragua, por ejemplo, un mecanismo establecido en el plano subnacional, el Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (CCPIAN), asesoró sistemáticamente al equipo de las Naciones Unidas.

37. La Sra. Sekkenes observó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se sustentaba firmemente en las normas y las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, y estaba orientada a hacer frente a las desigualdades y la falta de equidad. Aunque muchos Estados habían dado pasos significativos para sacar a sus poblaciones de la pobreza, la desigualdad había seguido aumentando. Según los datos, a pesar del crecimiento económico, los más marginados no tenían acceso a las mismas oportunidades que otros grupos sociales. Para el PNUD, el concepto de inclusión en el desarrollo era inseparable del concepto más amplio de derechos humanos. La participación inclusiva de todos los sectores de la sociedad en el examen y la elaboración de políticas y programas que afectaban a la población era fundamental para la sostenibilidad y el éxito de esos procesos.

38. El PNUD también estaba trabajando con muchas instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo para asegurar que tuvieran la capacidad de desempeñar su importante papel en los sistemas nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. La Sra. Sekkenes observó que las instituciones nacionales de derechos humanos constituían un nexo singular entre el Gobierno, la sociedad civil y las poblaciones marginadas, y podían poner en primer plano los problemas y los derechos de los grupos excluidos. En este contexto, reconoció la importancia de la labor de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en llevar la exclusión social y la incorporación de los derechos humanos al debate sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

39. Felix Kirchmeier, encargado del debate, Director de Estudios de Política de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, señaló que la vulnerabilidad no debía entenderse como un estado permanente, sino algo que se podía cambiar mediante la adopción de medidas positivas. Del mismo modo, la discapacidad era en gran medida una construcción social. A fin de superar esa vulnerabilidad, era esencial examinar los orígenes de esas cuestiones y no solo sus síntomas. A este respecto, pidió al Sr. Boulaa que explicara la forma en que los grupos

vulnerables podían participar en la formulación de políticas y la manera en que Argelia había abordado la interrelación de los derechos humanos en estos procesos. Señaló que el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad había publicado un conjunto de recomendaciones sobre el derecho a la participación de los grupos desfavorecidos. El Sr. Kirchmeier también tomó nota de la reciente creación por el Consejo de Derechos Humanos del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. También era importante tener en cuenta la inclusión de las minorías religiosas en la formulación de políticas. El Sr. Kirchmeier recordó que el equipo especial de alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo y el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo habían subrayado específicamente la importancia de la inclusión social de los grupos vulnerables.

40. El Sr. Mokhiber estaba de acuerdo en que la legitimidad de las políticas dependía de procesos inclusivos y participativos que permitían a todos los titulares de derechos participar y tener voz. Una cuestión importante era lo que se estaba haciendo para facilitar la participación autorizada de los grupos vulnerables. La discapacidad era una construcción social, y la función de los encargados de formular políticas era eliminar las barreras y los obstáculos al pleno ejercicio de los derechos humanos.

41. El representante de Chile señaló que, desde la transición del Estado a la democracia, los tratados internacionales de derechos humanos gozaban de rango constitucional. La integración de las obligaciones internacionales en la legislación nacional era un arduo pero importante desafío que Chile enfrentaba con determinación. El Gobierno también había realizado progresos en la mejora de la formulación de políticas con miras a llegar a las personas cuyos derechos debían ser defendidos. Se estaba mejorando, en colaboración con la sociedad civil, la participación en todas las etapas de la elaboración de políticas, por ejemplo, en el contexto del proceso del examen periódico universal. No debían olvidarse los derechos humanos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Estado invitó al panel a que diera más detalles sobre las formas de incorporar los derechos humanos y la mejor forma de abordar los retos en la recopilación de datos y la presentación de informes a los mecanismos internacionales de derechos humanos.

42. La ONG Autistic Minority International lamentó el hecho de que no hubiera ninguna persona con discapacidad o en representación de un grupo vulnerable en el panel del taller. La educación inclusiva seguía siendo un problema, y las personas con discapacidad aún no podían beneficiarse de una educación de calidad. Esto era especialmente cierto en el caso de las personas con discapacidad mental, que a veces eran colocadas en tutela y, por lo tanto, no podían participar plenamente en la vida pública y la adopción de decisiones. Las personas con autismo se enfrentaban a prejuicios específicos y discriminación.

43. El representante del Ecuador destacó que la inclusión social de los grupos vulnerables requería cambios en el modelo económico y social sobre la base de políticas que promovieran la igualdad y tuvieran en cuenta el género, la edad, la discapacidad y la migración.

44. El representante de la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos destacó el papel crucial de los defensores de los derechos humanos en la protección de los derechos humanos de la población vulnerable.

45. El Sr. di Robilant estaba de acuerdo en que era necesario lograr que la educación fuera más inclusiva, entre otras cosas examinando formas alternativas de educación y yendo más allá de los tramos de edad fijados. Por ejemplo, la educación permanente era importante, al igual que asegurarse de que los materiales de estudio fueran accesibles para todos.

46. El Sr. Boulaa destacó que Argelia estaba haciendo grandes progresos en la actualización de la legislación y la aplicación de políticas de inclusión social a nivel nacional. También destacó la importante función del poder judicial en el establecimiento y el desarrollo de jurisprudencia como salvaguardia adicional para los derechos de los grupos vulnerables. En su opinión, los grupos vulnerables también debían incluir a las personas que cumplieran duras condenas, incluida la pena de muerte. Señaló que Argelia había instituido una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir totalmente la pena capital.

47. La Sra. Sekkenes destacó que los procesos de participación eran un requisito fundamental para la aplicación satisfactoria de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, era necesario que las decisiones políticas estuvieran encaminadas a la redistribución de los recursos.

48. El Sr. Kirchmeier afirmó que los distintos grupos en ocasiones tenían intereses y programas opuestos, lo que contribuía a la riqueza de un país. También señaló que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluía la presentación de informes que requerían una labor considerable en Ginebra para unir los procesos a fin de asegurar la coherencia de la recopilación y el análisis de los datos.

V. Tercer diálogo: aplicación de mecanismos para la incorporación de los derechos humanos a través de políticas nacionales

49. La moderadora, Gladice Pickering, señaló que muy pocos Estados, de haberlos, eran inmunes a los desafíos de la aplicación de leyes y políticas. El propósito del debate actual era compartir esas experiencias y estudiar la forma de hacer más eficaces los mecanismos existentes.

50. Laura-Maria Crăciunean-Tatu, panelista, destacó que, en la aplicación de las políticas y los derechos, debían tenerse en cuenta los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración y Programa de Acción de Viena reafirmó la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de estas dos categorías de derechos.

51. Uno de los retos que Rumania tuvo que enfrentar en su transición a la democracia fue la protección de las minorías. Rumania ha reconocido 20 minorías, incluidos los romaníes. Además de los derechos generales, los derechos específicos estaban reconocidos y garantizados en tratados internacionales, acuerdos bilaterales y la Constitución.

52. La estrategia del Estado relativa a los romaníes para 2015-2020 hacía referencia a los importantes principios de derechos humanos, incluida la participación activa de la población romaní en la formulación y aplicación de las políticas que le concernían, y los principios de transparencia, no discriminación y dignidad humana. Se centraba principalmente en la prestación de educación, atención de la salud, vivienda y servicios sociales. En 2001, se estableció el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación como órgano autónomo e independiente con competencia cuasijudicial. La mayoría de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional se referían a actos de discriminación contra romaníes, incluida la incitación al odio.

53. La Sra. Crăciunean-Tatu afirmó que, en el caso de Rumania, la presencia de una institución nacional de derechos humanos sólida era fundamental para la aplicación efectiva de las medidas de lucha contra la discriminación. El Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación había mejorado la comprensión y la conciencia generales de los problemas específicos de la minoría romaní, y su labor había contribuido a asegurar la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas.

54. Luis Espinosa-Salas, encargado del debate, Consejero de la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, planteó la cuestión de si a alguno de los presentes nunca se le había preguntado acerca de las iniciativas del Consejo de Derechos Humanos y los debates celebrados por este, y si esas deliberaciones tenían algún objetivo. La pregunta que había que responder era cuál era la repercusión de las decisiones del Consejo en la vida diaria de la población en general. En cada período de sesiones, el Consejo aprobó un promedio de 30 resoluciones; por lo tanto, se habían aprobado alrededor de 900 resoluciones desde que el Consejo había sustituido a la Comisión de Derechos Humanos hacía diez años. Esta observación había motivado que Rumania, Argelia, el Ecuador e Italia cuestionaran el valor añadido de los debates del Consejo sobre los derechos humanos para la comunidad internacional.

55. Según el Sr. Espinosa-Salas, muchos Estados incumplían sus obligaciones: se comprometían con una serie de obligaciones de derechos humanos, pero se veían abrumados en lo que respectaba a la puesta en práctica. Todos los Estados incumplían sus obligaciones; si no fuera el caso, los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal serían totalmente diferentes. Ningún Estado había quedado exento de las recomendaciones sobre la aplicación de los derechos humanos. El Sr. Espinosa-Salas observó que la situación de los romaníes no era exclusiva de Rumania, sino que era motivo de preocupación en toda Europa.

56. El Sr. Espinosa-Salas coincidía con la Sra. Crăciunean-Tatu en que los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos debían considerarse en pie de igualdad. No debían estar separados cuando se estaban incorporando los derechos humanos. Con ese fin, se necesitaban un buen diagnóstico e indicadores precisos. Las voces de los grupos afectados también tenían que ser escuchadas; por ejemplo, cuando el Ecuador estaba estudiando el modo de hacer frente a las desigualdades económicas y sociales, elaboró, como primer paso, un atlas de los derechos humanos, que determinaba claramente las zonas en las que era necesario introducir mejoras mediante el suministro de bienes y servicios, como la vivienda, la salud, la alimentación y la educación. También puso de manifiesto las esferas en que los derechos humanos estaban en peligro. El Sr. Espinosa-Salas observó que, si bien los derechos humanos eran universales, debían tenerse en cuenta las características distintivas de cada uno de los países que recibían cooperación técnica. Señaló que la voluntad política y la cooperación técnica eran elementos fundamentales del éxito de la aplicación de los derechos humanos, y que la sociedad civil tenía que desempeñar la función fundamental de ejercer presión sobre los Gobiernos. Sin embargo, tenía que reconocerse la necesidad de contar con recursos suficientes como requisito fundamental para la aplicación de políticas eficaces de derechos humanos.

57. El representante de Argelia explicó que el Estado había podido verificar, por medio de una serie de estudios e informes publicados por los órganos de las Naciones Unidas, que existía un estrecho vínculo entre la pobreza extrema y el respeto de los derechos humanos. El representante pidió a los panelistas que proporcionaran más información sobre la forma en que los países desarrollados habían traducido sus obligaciones en materia de derechos humanos en el compromiso de dedicar el 0,7% de su PIB a ayuda para el desarrollo.

58. El representante de Italia explicó que, en Italia, dos comisiones parlamentarias colaboraban estrechamente con el Gobierno con el mandato específico de vigilar el respeto de los derechos humanos para reunir información, crear conciencia y mejorar el diálogo entre los interesados. Italia se estaba esforzando por integrar a los solicitantes de asilo mediante un sistema de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados (conocido como SPRAR), por el que el Gobierno central transferiría más competencias a las autoridades locales para atender las necesidades de los solicitantes de asilo y facilitar su integración. La sociedad civil participó activamente en la gestión del sistema.

59. Lin Lim, miembro del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, observó que, si bien se hablaba mucho sobre el papel de la sociedad civil, no estaba tan claro sobre quién se estaba hablando. Señaló que los grupos vulnerables eran a menudo representados por ONG, que no siempre incluían a representantes de los grupos. Era importante ser claros sobre la forma en que esos grupos podían participar en la adopción de decisiones de una manera auténtica y significativa.

60. El Sr. Boulaa preguntó a la Sra. Crăciunean-Tatu si podía proporcionar algunos ejemplos de las políticas aplicadas en Rumania para la población romaní en el país y en el ámbito de la Unión Europea, puesto que Rumania tenía obligaciones en los planos nacional y europeo.

61. La Sra. Crăciunean-Tatu recordó que, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la falta de recursos no puede utilizarse como excusa para no aplicar esos derechos, dado que los recursos podían proceder no solo del Estado, sino también de la cooperación internacional. Con respecto a las políticas nacionales y de la Unión Europea, en Rumania, la estrategia para la inclusión de los romaníes tuvo plenamente en cuenta la legislación y las políticas pertinentes de la Unión Europea.

VI. Cuarto diálogo: mecanismos e instrumentos para la vigilancia de la aplicación de políticas nacionales y su seguimiento

62. Shahrzad Tadjbakhsh, Jefa de la Subdivisión del Examen Periódico Universal del ACNUDH, dijo que los órganos de vigilancia de los derechos humanos, incluidos los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales y el examen periódico universal, eran recursos fundamentales para la formulación y el seguimiento de las políticas nacionales. Las políticas participativas y responsables ayudaban a lograr una mayor implicación y un efecto más sostenido. El éxito de la incorporación de los derechos humanos requiere una coordinación interministerial eficaz, una buena planificación, datos exactos e indicadores precisos.

63. José Antonio Burneo Labrín, Profesor de la Universidad Católica del Perú, hizo una reseña de sus experiencias en la formulación de políticas nacionales en el Perú y su compromiso personal en la elaboración de los dos planes de acción nacionales de derechos humanos. La supervisión y el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos no deberían ser responsabilidad de una única institución central, sino de una pluralidad de agentes del Estado. Los ministerios y demás organismos tenían competencias y responsabilidades específicas con respecto a las políticas, como las de salud, educación, trabajo, derechos de la mujer, derechos del niño, migrantes y grupos vulnerables. Estos órganos prepararon sus propios planes de trabajo específicos para el cumplimiento de sus mandatos. Para que la aplicación de las políticas fuera eficaz debía ser intersectorial y tener en cuenta las especificidades locales, regionales y nacionales. Esta labor también tuvo que tener en cuenta las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. El Sr. Burneo señaló la importancia de que participara no solo el poder ejecutivo en la realización de los derechos humanos, dado el creciente interés en esos derechos entre, por ejemplo, el poder judicial. Esta podía ser una importante esfera de interés para la asistencia técnica.

64. El Sr. Burneo destacó que la formulación de políticas inclusivas dependía de que se reafirmaran los derechos humanos mediante garantías constitucionales y legales nacionales que se ajustaran a las obligaciones internacionales del Estado. De igual importancia era que el Estado tuviera una clara voluntad política y el compromiso de traducir las obligaciones

jurídicas en un cambio positivo. Para que esto ocurriera, eran necesarias instituciones eficaces responsables de coordinar las medidas del Gobierno. La eficacia de la formulación y la aplicación de las políticas también dependía de que se respetara plenamente el principio de no discriminación y la participación significativa de la sociedad civil y los representantes de los grupos vulnerables en todas las etapas del proceso. Las instituciones estatales responsables de la supervisión y el seguimiento debían disponer de información fiable e indicadores de derechos humanos que demostraran el grado en que los Estados habían cumplido sus obligaciones internacionales. El Sr. Burneo subrayó la importancia del programa de cooperación técnica del ACNUDH como fuente de orientación y asesoramiento en la formulación de políticas nacionales en la esfera de los derechos humanos. A este respecto, el ACNUDH tenía un importante papel que desempeñar en la sistematización de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales y el examen periódico universal a fin de que la información fuera más accesible para los Gobiernos y otros agentes.

65. En su intervención, Judith Robertson, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia, puso de relieve el papel de los planes de acción nacionales sobre los derechos humanos como medio para incorporar los derechos en la ejecución de los programas de políticas nacionales, como se reconoció y estableció en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por consenso en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993.

66. La Sra. Robertson explicó que el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia, puesto en marcha en 2013, era una hoja de ruta para la acción colectiva en toda Escocia para que los derechos humanos fueran una realidad para todos. Sobre la base de pruebas y una participación amplia, el plan había sido elaborado por un grupo de redacción cuyos miembros provenían de los sectores público y del voluntariado. Un consejo consultivo, cuyos miembros reflejaban la diversidad de la vida cívica de Escocia, supervisó el proceso.

67. El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia no era un plan de acción tradicional, sino más bien un programa de acción transformador que incluía resultados y prioridades convenidos y un proceso de aplicación para 2013-2017. Había fomentado la acción coordinada de numerosas entidades públicas y organizaciones de voluntarios para lograr el ideal de una Escocia en que todos pudieran vivir con dignidad, y donde la justicia social, la igualdad y el empoderamiento fueran las características distintivas de la sociedad.

68. El ideal global del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia no pudo lograrse de manera rápida, aunque fue lo que impulsó todo lo que tuvo lugar durante su aplicación. La primera versión del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia, que era un plan cuatrienal, no era más que la primera etapa de un proceso más largo. El cambio que pretendía el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia era una cultura de derechos humanos sostenible en todos los ámbitos de la vida. Los organismos y organizaciones públicos, que adoptaron un enfoque basado en los derechos humanos para su labor, facilitaron este cambio cultural. El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia se basó en las normas internacionales de derechos humanos y los principios de un enfoque basado en los derechos humanos.

69. El Marco Nacional de Desempeño era un mecanismo utilizado por el Gobierno de Escocia que permitía a toda persona juzgar por sí misma el desempeño de Escocia sobre la base de una amplia gama de indicadores. Los indicadores proporcionaban una medida general del bienestar nacional y social mediante una serie de indicadores económicos, sociales y ambientales y metas que se actualizaban tan pronto como se disponía de datos. La Sra. Robertson observó que, para ser eficaz, un mecanismo de vigilancia debía adaptarse a la experiencia nacional y reflejar la forma en que una nación medía su propio progreso.

En una fase temprana de la elaboración de la base de datos empíricos para el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia, se tomó la decisión de estudiar el ejercicio efectivo de los derechos en Escocia por temas; por ejemplo, uno de los temas era el efecto de “dónde vivimos”. En la práctica, esta sección se centró en cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada, los desalojos y la discriminación a que se enfrentaban las personas en el acceso a una variedad de servicios, como la atención de la salud y la educación. La integración de los derechos humanos en los mecanismos de vigilancia a nivel local y nacional serviría de apoyo para la supervisión de las futuras versiones del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Escocia y, de ese modo, la ayudaría a cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes en virtud de todos los tratados internacionales de derechos humanos en los que era parte y a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

70. La Jefa de la Subdivisión del Examen Periódico Universal destacó la importancia de un organismo principal para asegurar la coherencia en la aplicación de las políticas. También era esencial un órgano de coordinación nacional para un seguimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

71. El Sr. di Robilant compartió su experiencia con la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales, en la que se recopilaron datos sobre cuestiones específicas de los Estados. La aplicación de los derechos humanos seguía estando fragmentada dentro de los países y entre ellos, y era necesario coordinar la recopilación de datos. Hizo hincapié en la importancia de las instituciones independientes como mecanismos de reparación.

72. El representante de Portugal afirmó que, en 2010, el Estado había establecido el Comité Nacional de Derechos Humanos, un mecanismo de coordinación presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con centros de coordinación en todos los ministerios. El mandato del Comité era promover un enfoque integrado de la aplicación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También coordinaba los informes al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal y la aplicación de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

73. El representante de la Alianza Internacional de la Discapacidad afirmó que, si bien en algunos lugares se elaboraban políticas de una manera inclusiva, no siempre era así en lo que respectaba a la vigilancia de su aplicación. Pidió al panel que compartiera opiniones sobre la forma en que podía reforzarse la inclusión de los grupos vulnerables en la supervisión y el seguimiento.

74. La Sra. Lim subrayó que la supervisión debía incluir los presupuestos y la forma en que se asignaban los recursos. Muchos países en desarrollo elaboraron planes de desarrollo y planes de acción nacionales de derechos humanos quinquenales. El reto consistía en integrar esas dos corrientes, a fin de que se incorporaran los derechos humanos en el proceso de desarrollo nacional.

75. El Sr. Boulaa afirmó que Argelia tenía buenas experiencias que compartir sobre la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que se había reflejado adecuadamente en las políticas nacionales, en particular en el contexto de la crisis de los refugiados sirios.

76. La Sra. Robinson pidió opiniones sobre la manera en que podía fortalecerse el papel de la sociedad civil en la supervisión. La aplicación efectiva dependía de la voluntad política, además de las iniciativas de la sociedad civil. Aunque la capacidad de la sociedad civil para asumir un papel activo en la supervisión había aumentado, seguía siendo necesario aumentar la conciencia de las ONG sobre los procesos internacionales. Las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñaban un papel importante en la creación de esas capacidades. La oradora añadió que, si bien Escocia tenía una sociedad civil fuerte, seguía habiendo lagunas y deficiencias en su capacidad para utilizar

indicadores y otros marcos de desempeño. Señaló que la práctica de la supervisión de los presupuestos seguía siendo escasa en Escocia, aunque se estaba trabajando en esa esfera. También había cierta resistencia a incluir los derechos humanos en la evaluación del presupuesto, de manera que también eso seguía siendo una labor en curso.

77. El Sr. Burneo observó que, en el Perú, cada sector del Gobierno tenía su propio plan de acción, pero muy pocos de ellos estaban basados en los derechos humanos en esa etapa. La mejor idea no era sustituir los planes de acción específicos de un sector por un “superplán”, sino más bien asegurarse de que se tuvieran en cuenta los derechos humanos. Sugirió que los órganos creados en virtud de tratados consideraran la posibilidad de formular observaciones generales conjuntas para superar lo que consideraba un sistema fragmentado de la presentación de informes y el seguimiento.

VII. Sesión de clausura: análisis de los resultados y reflexiones finales sobre el camino por recorrer

78. Durante la sesión de clausura, los panelistas y los encargados del debate formularon una serie de observaciones finales que podían servir de orientación a los Estados en sus esfuerzos por incorporar los derechos humanos en las políticas nacionales.

79. Había cada vez más conciencia y reconocimiento de los derechos humanos como base para un orden internacional pacífico. La comunidad internacional se enfrentaba a nuevas situaciones relativas a la protección de los grupos vulnerables, incluidos los migrantes, que en sí presentaban tanto desafíos como oportunidades. Se trataba de cuestiones urgentes para las que eran necesarias una participación y estrategias tanto inmediatas como a largo plazo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrecía puntos de entrada para la aplicación inclusiva y participativa de los planes y políticas basados en los derechos. El establecimiento y la consolidación de mecanismos eficaces de rendición de cuentas en los planos nacional e internacional eran esenciales para ese progreso. Los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las Naciones Unidas tenían que encontrar un enfoque común para lograr estos objetivos compartidos.

80. La aplicación de los derechos humanos debía entenderse como el comienzo y el fin de la buena gestión pública y un parámetro con respecto al que los Gobiernos debían medir su propia actuación. No dejar a nadie atrás debía ser un principio fundamental en la formulación y aplicación de políticas nacionales. Ello requería la participación plena y significativa de los grupos vulnerables y marginados en la formulación de políticas para la equidad y la inclusión social.

81. Los derechos de los grupos vulnerables también debían integrarse en la aplicación de los planes nacionales de desarrollo. El requisito del consentimiento libre, previo e informado en la adopción de decisiones en el sector público era especialmente importante en las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Para estas comunidades era también primordial el derecho a la libre determinación. Los derechos de los migrantes también exigían una atención urgente, especialmente a la luz de los acontecimientos en Europa en los últimos años.

82. La aplicación de los derechos humanos iba más allá de la legislación. Abarcaba la generación de voluntad política y la incorporación sistemática de los derechos humanos en las políticas nacionales mediante una participación significativa y práctica. Por lo tanto, también era importante reconocer la importancia de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, durante todo el proceso de formulación de políticas. El poder judicial también tiene que desempeñar un papel fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos y el establecimiento de una jurisprudencia sólida. Las actividades de sensibilización en las escuelas, las universidades y

los medios de comunicación eran necesarias como parte de los esfuerzos encaminados a reforzar la aplicación nacional de los derechos humanos.

83. Aunque la voluntad política era importante, la aplicación solo era posible si se disponía de los recursos necesarios. Por esta razón, la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a los presupuestos era de una importancia fundamental y no podía disociarse de la formulación y la aplicación de políticas.
